

Carlos Aguirre y Ricardo D. Salvatore
Editores

BIBLIOTECAS Y CULTURA LETRADA EN AMÉRICA LATINA

Siglos XIX y XX



Capítulo 11



BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ

Centro Bibliográfico Nacional

027.08 B Bibliotecas y cultura letrada en América Latina : siglos XIX y XX / Carlos Aguirre y Ricardo D. Salvatore, editores.-- 1a ed.-- Lima : Pontificia Universidad Católica, Fondo Editorial, 2018 (Lima : Tarea Asociación Gráfica Educativa).

364 p. : il., facsím. ; 24 cm.

Ensayos del coloquio "Bibliotecas de las Américas: poder, capital cultural y circulación de conocimientos, 1800-2000", realizado en la Universidad Torcuato di Tella (Buenos Aires, Argentina) el 19 y 20 de agosto de 2014.

Incluye bibliografías.

Contenido: Bibliotecas y formación del Estado-Nación -- Bibliotecas y cultura letrada -- Bibliotecas, museos y prácticas científicas y culturales -- Bibliotecas, movilización política y proyectos revolucionarios.

D.L. 2018-07060

ISBN 978-612-317-364-7

1. Bibliotecas - América Latina - Historia - Siglos XIX-XX 2. Bibliotecas públicas - América Latina - Siglos XIX-XX 3. Bibliotecas privadas - América Latina - Siglos XIX-XX 4. Bibliotecas y sociedad - América Latina 5. América Latina - Vida intelectual - Siglos XIX-XX I. Aguirre, Carlos, 1958-, editor II. Salvatore, Ricardo D, editor III. Pontificia Universidad Católica del Perú

BNP: 2018-127

Bibliotecas y cultura letrada en América Latina

Siglos XIX y XX

Carlos Aguirre y Ricardo D. Salvatore, editores

© Carlos Aguirre y Ricardo D. Salvatore, editores, 2018

De esta edición:

© Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial, 2018

Av. Universitaria 1801, Lima 32, Perú

feditor@pucp.edu.pe

www.fondoeditorial.pucp.edu.pe

Diseño, diagramación, corrección de estilo
y cuidado de la edición: Fondo Editorial PUCP

Fotografía de carátula: Interior of the Real Gabinete Português de Leitura in Rio de Janeiro, Brazil. <https://www.flickr.com/photos/uwephilly/3301983/>

Primera edición: junio de 2018

Tiraje: 500 ejemplares

Prohibida la reproducción de este libro por cualquier medio,
total o parcialmente, sin permiso expreso de los editores.

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2018-07060

ISBN: 978-612-317-364-7

Registro del Proyecto Editorial: 31501361800481

Impreso en Tarea Asociación Gráfica Educativa

Pasaje María Auxiliadora 156, Lima 5, Perú

LAS BIBLIOTECAS DURANTE EL PERONISMO, 1946-1955

Flavia Fiorucci

El 13 de mayo de 1955, fue intervenida la Biblioteca Nacional y se nombró a un nuevo director. El decreto que autorizó dicho proceder se justificó por la necesidad de adecuar dicha institución a los objetivos de la doctrina justicialista, dado que hasta entonces la misma tan solo «coadyuvó a la formación de generaciones de argentinos de un sectarismo dogmáticos», cuyos responsables eran «los núcleos gobernantes de la tradicional oligarquía». La intervención tenía, por lo tanto, el expreso objetivo de «reactualizar el sentido ecuménico de [la] estructura [de la biblioteca] para armonizarlo con la cultura autóctona y el carácter orgánico de la doctrina nacional creada por el justicialismo, y [...] encauzar su actividad [de acuerdo con] los enunciados fundamentales de la Revolución Justicialista que determina que todos los instrumentos de la cultura deben constituirse, actuar y proyectarse en función de un servicio social», tal como estaba estipulado en el Segundo Plan Quinquenal¹. Si bien la retórica que anuncia la intervención de la Biblioteca Nacional se ajusta a la que asiduamente recurría el gobierno de Perón —la repetida condena a la oligarquía, la apelación a la doctrina justicialista y a la cultura nacional— hay un dato que sorprende: la fecha tardía del decreto. El mismo emana de una administración que hacía diez años tenía discrecionalidad sobre esta institución: nombraba a su director, decidía sobre su presupuesto y tenía capacidad para definir sus objetivos. Más allá de cierto oportunismo —era necesario justificar la intervención—, las causas invocadas ponen en duda la misma capacidad del Estado peronista de coordinar y aun de regular el accionar de sus dependencias estatales. El gobierno admitía que, en casi una década, había sido incapaz de ajustar la Biblioteca Nacional a los principios que debían guiar la acción estatal en

¹ Decreto 7144 del Poder Ejecutivo Nacional, 13 de mayo de 1955.

el área de la cultura. El balance surgía, además, de una administración que ha sido asociada a la construcción de nuevas capacidades estatales y a la incorporación de instrumentos de intervención que, según la crítica, fueron fruto de un consenso sobre la legitimidad de la planificación estatal (Berrotarán, 2003; Elena, 2005).

¿Tuvo el peronismo una política cultural distintiva que significó una ruptura con respecto a lo anterior? ¿Cómo se plasmó la política cultural? ¿Cuál fue la política del peronismo en torno a la lectura y las bibliotecas? El ejercicio que propongo aquí es examinar microscópicamente el interior de dos dependencias estatales de la burocracia cultural en tiempos donde se ensaya una reforma del Estado de gran envergadura —al menos en términos retóricos— y donde se asiste a cambios políticos y sociales de proporciones inusitadas en la historia argentina. Las dependencias escogidas —la Biblioteca Nacional y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP)— son agencias sobre cuyo protagonismo podemos sospechar: se ocupan de cuestiones menos inmediatas como pueden ser, por ejemplo, la política económica y social. Estas instituciones, sin embargo, son potencialmente muy visibles —pensemos en el efecto de propaganda que implica la construcción de un nuevo edificio para la Biblioteca Nacional— y, además, son claves a la hora de diseñar una política en torno a la cultura letrada. Claramente, una mirada centrada en la suerte de estos dos tipos de bibliotecas —la Nacional y las populares— no nos permite agotar el tema de la política del peronismo en torno a la cultura letrada. No obstante, el acento puesto aquí sobre la suerte de las bibliotecas constituye una vía de entrada al análisis de la cultura desde un objeto que es social e histórico pero a la vez físico, y que ha sido escasamente abordado en la historiografía argentina.

La biblioteca es una institución versátil. Es, como anota Thomas Augst (2001), «finalmente aquello que hace» (p. 6). Las bibliotecas no solo facilitan la difusión de objetos culturales y el almacenamiento de información, sino que institucionalizan ideales de cultura a través de sus políticas de acceso, adquisición y circulación (p. 17). El énfasis dado en este trabajo al día a día de estas instituciones desviándose deliberadamente de las retóricas estatales nos permite apreciar cómo se materializaron —o no— los enunciados respecto a la política cultural del peronismo y cómo estos fueron recibidos y reprocesados por los burócratas encargados de ponerlos en práctica. El recorrido microscópico propuesto aquí también permite observar ciertos aspectos de la dinámica interna del Estado peronista, para así matizar las interpretaciones que subrayan sus capacidades y devolver una imagen que nos sugiere esfuerzos espasmódicos y proyectos que se diluyen².

² He discutido la reforma de la burocracia cultural durante el peronismo en Fiorucci, 2011 (pp. 29-63).

UNA BIBLIOTECA PARA LECTORES «PROPIOS»

La Biblioteca Pública del Estado de Buenos Aires se convirtió en Biblioteca Nacional en 1884, luego de la federalización de Buenos Aires, y comenzó un próspero periodo de construcción institucional bajo el liderazgo del publicista francés Paul Groussac³. En esos años, aunque con altibajos, se fueron delineando los objetivos de la institución: reunir la producción intelectual del país y la más representativa del exterior. Como veremos, la llegada del peronismo no modificó el rol de la institución ni significó cambios relevantes en su organización. Esto fue así aun cuando la Biblioteca Nacional y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares se vieron involucradas en un ambicioso plan de reforma institucional del peronismo. A partir de 1948, el Estado agrupó a estas agencias, junto con la Comisión Nacional de Monumentos y Lugares Históricos y el Teatro Cervantes, bajo un mismo mandato institucional con el objetivo de lograr una mayor coordinación; para ello se creó la Subsecretaría de Cultura⁴.

La continuidad de la Biblioteca Nacional con la etapa previa se explica en gran medida por una simple razón: quien era su director desde 1931 continuó siéndolo hasta marzo de 1955. Gustavo Martínez Zuviría, conspicuo prohombre del nacionalismo católico y conocido autor de *bestsellers* de contenido antisemita, fue nombrado director de la Biblioteca Nacional por el presidente Uriburu en 1931 y permaneció en dicho cargo hasta comienzos de 1955. Desde un principio, Martínez Zuviría se abocó a la tarea de modernizar y profesionalizar la biblioteca. Hacia 1946 sus logros no eran menores: había reorganizado la sección de Canje, con lo que había logrado aumentar más que ningún otro director el acervo de la biblioteca, y había dotado a la institución con una sala de investigadores —Sala Paul Groussac— y otra destinada exclusivamente a la consulta de publicaciones periódicas —Sala de Revistas— (Biblioteca Nacional, 1933)⁵. A partir de 1933, agrupó los libros raros y preciosos en una sala especial. En 1935 creó la Sección Argentina Oficial, que pretendía reunir todo el material producido por el Estado —memorias, leyes, diario de sesiones, presupuestos e informes, entre otros—. Además, aumentó en

³ Sobre el papel de Groussac en la Biblioteca Nacional, véase Bruno, 2005.

⁴ La fundación de la Subsecretaría de Cultura se insertaba en una reforma burocrática de mayor envergadura: la separación de la administración de justicia y educación. En un principio, la creación de esta institución debe ser vista como una ruptura importante en torno al modelo de Estado, en tanto implicaba la formalización de la intervención pública en el área cultural. No obstante, la Subsecretaría de Cultura tuvo efectos limitados, ya que, al igual que la economía del gobierno peronista, tuvo periodos que fueron de la expansión a la crisis. En 1950 la Subsecretaría fue rebautizada como Dirección de Cultura y se nombró como director a José Castiñeira de Dios.

⁵ Al principio de su gestión, en 1931, había 265 899 volúmenes; en 1952 la Biblioteca contaba con 651 186.

un número nada desdeñable para la época la cantidad de ficheros: se incorporó, por ejemplo, un catálogo de ciencias sociales y teología. Elevó también la recepción de publicaciones periódicas. Si antes de asumir la Biblioteca Nacional recibía 63 publicaciones periódicas, hacia 1933 estas sumaban 1243, y hacia 1939 ya llegaban a 2467. La recepción de diarios también creció con la llegada de Martínez Zuviría. En 1931 llegaban 63 diarios; tres años después, las memorias se jactaban de que la Biblioteca recibía 166 diarios. Martínez Zuviría reanudó, además, la edición de la revista *La Biblioteca* fundada por Groussac. Allí se dedicó a reproducir el contenido de los archivos de la institución. Dicha publicación, que puede ser leída como la jerarquización de un deseable catálogo de temas de investigación, se constituyó en un valioso instrumento para los historiadores (Tesler, 2004). A través de una campaña en los medios, Martínez Zuviría incrementó en forma evidente la recepción de donaciones. Paralelamente, desplegó esfuerzos para transparentar la administración de la biblioteca con la publicación de memorias anuales que asumían la ritualizada práctica de enumerar objetivos, proveer estadísticas, recapitular los logros de la gestión e identificar las fallas y a los responsables de las mismas.

A pesar de los éxitos, la Biblioteca Nacional distaba mucho de ser una institución moderna, limitada en su labor por graves problemas de infraestructura. El edificio era claramente el capítulo que más preocupaba a su director: este se encontraba en un inmueble inicialmente proyectado para la Lotería Nacional, desbordado por el número de volúmenes acumulados y amenazado por las filtraciones de agua. La llegada de Perón y, concretamente, los cambios que fueron introducidos en la burocracia cultural durante sus primeros años de gobierno no modificaron la vida de esta institución. Martínez Zuviría continuó con su proyecto de modernización y profesionalización de la biblioteca y, al menos hasta 1952, tan solo se vio restringido por los problemas heredados de la década anterior: la falta de presupuesto, la falta de personal y la irresoluble cuestión del edificio, temas sobre los cuales Martínez Zuviría no se cansó de reclamar a las autoridades nacionales (Biblioteca Nacional, 1948). En una carta al director de Cultura fechada el 22 de octubre de 1951, Martínez Zuviría resumió la urgencia de la construcción de un nuevo edificio al afirmar que «dentro de poco tiempo [la Biblioteca] no podrá guardar ordenadamente ni un solo libro más»⁶. El alarmista comentario de Martínez Zuviría revelaba la frustración del director: sus problemas no solo no eran atendidos sino que estos se habían exacerbado en virtud del decreto de economías de 1950 y dado el pedido concreto del entonces director de Cultura, José Castiñeira de Dios, para que la biblioteca rebajara en un 10% sus gastos.

⁶ Libro de Correspondencia de la Biblioteca Nacional, Archivo Institucional de la Biblioteca Nacional, tomo I, 1951.

Martínez Zuviría tenía una postura explícita sobre cuál debía ser la función que la Biblioteca Nacional debía cumplir y durante toda su gestión estuvo abocado en la medida de lo posible a este objetivo —al igual que lo había hecho en los años treinta—. En 1948, en la ficha de cada lector, se había impreso una leyenda que instaba a los usuarios a tener paciencia para esperar el material requerido: se indicaba que la demora era propia de las grandes bibliotecas nacionales, «ya que en esas instituciones no se va a estudiar la lección del día, ni leer la última novela del autor en boga»; y se concluía que «las Bibliotecas de Estado tienen funciones muy distintas de las bibliotecas populares o de barrio» (Biblioteca Nacional, 1949, p. 22)⁷. En la visión de Martínez Zuviría, una biblioteca nacional no podía ser un apéndice funcional al sistema educativo ni parte del circuito del ocio; tampoco podía ser una institución para la pedagogía de las masas. Por el contrario, lo que él buscaba era poner la biblioteca al servicio de la investigación; de allí su preocupación por modernizar los ficheros, por aumentar el acervo de archivos —dispuso, por ejemplo, la formación de un archivo de publicaciones oficiales— y por el perfil que tomó la revista de la biblioteca bajo su dirección. La imagen del usuario ideal que tenía Martínez Zuviría claramente distaba mucho de la realidad: la biblioteca era concurrida en su mayoría por un público de escolares que acudían para hacer sus deberes. Ante esta situación, el director aumentó las restricciones para ingresar a la sala de investigadores «de modo de atraer —según sus propias palabras— a los lectores que son *propios* de una biblioteca como la Nacional (Martínez Zuviría, 1933, p. 28; énfasis propio). Dadas las limitaciones de espacio, esta medida —junto con la nota sobre la demora— buscaba disuadir la concurrencia de ciertos usuarios y promover en contrapartida la de aquellos que pudieran prestigiar la institución. Esto no significó la imposición de nuevos requisitos para acceder a la biblioteca. Tan solo implicaba que su director concentraba sus energías e intentaba adaptar el establecimiento al grupo más marginal de usuarios como sus mismas estadísticas lo indican. En 1945, de 112 840 registros anotados solo 1806 eran investigadores⁸. En contrapartida, los niños sumaban más de 9415 fichas.

Aunque poco sabemos sobre aquello que para su director sería la «colección ideal de la Biblioteca Nacional», Martínez Zuviría tenía una política muy liberal en cuanto a las adquisiciones, un rasgo que contradice lo que tradicionalmente

⁷ En el momento en que Martínez Zuviría realiza este comentario, el estatus rebajado de la ficción y de la lectura placentera no gozaba del mismo consenso que a principios de siglo. Las novelas eran incluidas en colecciones «serias» cuya selección era realizada por intelectuales que depositaban en los libros esperanzas transformadoras. Tal es el caso, por ejemplo, de la editorial izquierdista Claridad (véase Romero, 1990, p. 52). Para una lectura general sobre la industria del libro y la difusión de la lectura, véase De Diego, 2006, especialmente las pp. 91-123.

⁸ En ambos casos, estos números eran menores, porque muchos de estos usuarios concurrían más de una vez al año a la institución.

se hubiera esperado de un personaje como él, vinculado a las vertientes más reaccionarias del nacionalismo local. La contradicción entre dicha política y los ideales antiliberales de Martínez Zuviría no deja de asombrar, sobre todo si traemos a colación una instancia en la cual estos últimos se cristalizaron: su accionar como ministro de Justicia e Instrucción entre 1943 y 1944. Desde ese puesto, Martínez Zuviría lideró una fuerte ofensiva antiliberal y fue responsable, entre otras cosas, de la introducción de la religión católica en el currículum de las escuelas públicas. En el caso de la Biblioteca Nacional, su desvelo no era ideológico sino «numérico»: acrecentar el acervo. Según su percepción, el número de ejemplares de la colección era un signo de modernidad; por lo tanto, el ingreso de libros fue durante su gestión indiscriminado y sin censuras. Una de sus principales preocupaciones fue vigilar la prolija llegada de los libros de la Oficina de Depósito Legal. Frecuentemente recordó a los escritores la necesidad de respetar la Ley de Propiedad Literaria, que les exigía inscribir sus obras en dicha institución y dejar allí una copia destinada a la Biblioteca. Esto mismo hablaba de la ausencia de una política de adquisiciones, ya que cualquier libro podía ingresar proveniente del Depósito. Se podía adivinar, en este énfasis de Martínez Zuviría, el ideal de una Biblioteca Nacional como repositorio del patrimonio bibliográfico nacional, lo que, vale aclarar, estaba en tensión con la idea de una biblioteca moderna al servicio de los investigadores, ya que cualquier libro, sin importar su tema o calidad, podía engrosar los ya saturados estantes de la institución. Más que a una política de selección, la inquietud del director se dirigía a las necesidades técnicas relacionadas al aumento de la colección: «No basta poseer libros» —escribía en la memoria de 1935— «es preciso ficharlos, clasificarlos, alojarlos, poder hallarlos» (Biblioteca Nacional, 1936, pp. 48-49).

Para Martínez Zuviría, la modernización de la biblioteca se completaba con la profesionalización del bibliotecario y la contratación de personal idóneo. En repetidas ocasiones, señaló este como el único modo de poder adaptar la biblioteca a los avances que se estaban dando en la ciencia bibliotecaria, especialmente en los sistemas de catalogación⁹. Martínez Zuviría participaba así de un debate contemporáneo que buscaba posicionar a la bibliotecología como una profesión¹⁰.

⁹ «No es posible en la actualidad, dado el progreso que han alcanzado los conocimientos y la enorme difusión del libro, intentar una catalogación cuidadosa y responsable sin contar con el personal capacitado para efectuarlo» (Martínez Zuviría, 1947, p. 82).

¹⁰ Falta todavía un estudio de la profesionalización de la figura del bibliotecario en el país. Signos de la gradual profesionalización vivida en la década aquí estudiada son: los avances que se dan en esos años en la enseñanza de la bibliotecología, por ejemplo la instauración de un cursillo bibliotecológico en la Universidad del Litoral; la instauración de un decreto que estipulaba que para ser nombrado en las bibliotecas dependientes del Consejo Nacional de Educación había que poseer el título otorgado por la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires o por la Escuela del Museo Social; la organización de varios congresos y, por último, la creación en 1953 de la Asociación de

Sin embargo, probablemente motivado por su ánimo de preservar su puesto, reservaba un lugar preponderante a los intelectuales: en su visión, eran los «forjadores de cultura» quienes debían dirigir las bibliotecas¹¹. Cabe aclarar que, durante su gestión, se incrementó el personal de la biblioteca, pero no hubo prácticamente mejoras en lo que concierne a su entrenamiento (Rodríguez Pereyra, 1994). Conforme a una visión de la biblioteca como reducto para la investigación, los actos culturales de la institución y la apertura al público con cursos, charlas o conferencias eran más bien escasos. Por lo tanto, no se puede encontrar en las actividades desplegadas por la gestión una disposición proselitista, ni tampoco una política de «orientación» de la lectura, práctica común en otras bibliotecas¹². Se festejaban las efemérides patrias sin mayor distinción sobre su contenido ideológico o histórico y sin mayores pompas. Tampoco se registran casos de censura más allá de la restricción de ciertos materiales solo accesibles a los investigadores¹³. Además de la falta de una visión «enciclopédica» de privilegiar ciertas obras, todo esto significaba que no había nada en el modo de posicionar la biblioteca que pudiera apelar a uno de los objetivos centrales con que había sido creada la Subsecretaría de Cultura: la democratización del acceso a la cultura. La Biblioteca Nacional no solo no estaba inmersa en una política de expansión de la lectura en los sectores populares sino que buscaba —al menos en los recintos de la institución— disuadirla, lo que era obvio con el comentario despreciativo sobre las novelitas de moda y los escolares¹⁴.

Bibliotecarios Graduados de la Argentina. El hecho de que los cargos más codiciados en el mundo bibliotecológico —el de director de la Biblioteca Nacional y el de presidente de la CONABIP— no eran ocupados por bibliotecarios de carrera revela hasta qué punto la profesionalización continuaba siendo precaria. Al ser —como la docencia— una profesión ejercida mayoritariamente por mujeres, este proceso se relaciona estrechamente con la entrada de la mujer al mercado de trabajo. Para una rápida revisión de los avances mencionados, véase Hourcade, 1952. Sobre la figura del bibliotecario, la historiografía norteamericana recoge un extenso debate. Para un ensayo que remite a los distintos aportes bibliográficos, véase Goedeken, 2004.

¹¹ Martínez Zuviría fue el primer bibliotecario de la Universidad del Litoral y es allí donde comenzó su formación autodidacta en este campo.

¹² Para una sugerente aproximación sobre los a veces sutiles mecanismos utilizados por las bibliotecas para intervenir sobre las lecturas de sus usuarios, véase Johanningsmeir, 2004. Hay una breve mención a este debate en el ámbito de las bibliotecas populares en Gutiérrez & Romero, 1989, p. 49. Luis Alberto Romero retoma esta cuestión en Romero, 2006, pp. 40-43. Véase también González, 1990; y Romero, 1995.

¹³ Un ejemplo de estos mecanismos se puede leer en Kasinec, 2001. Véase también Stieg, 1992.

¹⁴ Cabe señalar que Martínez Zuviría sí tenía cierta preocupación por que la lectura y la cultura llegaran a los sectores populares. En 1935 organizó una campaña de donación de libros escolares para ser destinados a escuelas pobres. La revista *Leoplan* se sumó a la iniciativa y publicó el pedido de Martínez Zuviría, cuyo contenido se deduce del título: «Para que los escolares pobres tengan libros» (*Leoplan*, I(2), diciembre de 1934, p. 47). Por otro lado, él también se beneficiaba de la lectura popular al ser un exitoso autor de *bestsellers*. Según Manuel Gálvez, el éxito de Martínez Zuviría fue tal que era el

Una mirada recortada tan solo sobre la Biblioteca Nacional durante el periodo aquí estudiado no hubiera permitido adivinar las transformaciones que vivía el país. No es posible identificar actividades o medidas que pudieran ser asociadas o evocar la identidad política del gobierno, con la excepción de una exposición de libros sobre los ferrocarriles en ocasión de la nacionalización de las empresas ferroviarias de capital extranjero en 1947. Esta «neutralidad política» de la biblioteca se sostuvo sin ningún tipo de presiones hasta el final del primer gobierno peronista. La Subsecretaría de Cultura —convertida en dirección a partir de 1950— respetó sin entrometerse esta gestión «imparcial» de la biblioteca y, pese a las restricciones materiales, que por otra parte no eran un dato novedoso, Martínez Zuviría gozó de autonomía para llevar adelante su proyecto. Durante este periodo, el director no recibió ningún instructivo sobre la gestión de la institución, la cual podía potencialmente ser todo aquello que él quería que fuese. Esto significó la ausencia de un debate sobre cuál debía ser el rol de las bibliotecas del Estado en una sociedad en plena transformación. Sin embargo, a partir de 1951, con las preparaciones para la elaboración del Segundo Plan Quinquenal, el director de la Biblioteca Nacional comenzó a recibir circulares y resoluciones en las que se percibía una renovada voluntad del gobierno de adecuar esta institución a los lineamientos de la política general del Estado.

En junio de 1951, el ministro de Educación pidió a las distintas dependencias que lo conformaban la elaboración de un plan de «labor con criterio unitario» a fin de formular el anteproyecto de las actividades del ministerio para el Segundo Plan Quinquenal. La demanda del ministerio estipulaba que dicho plan debía contener un capítulo donde se especificaran los principios doctrinarios que lo guiaban, punto que consistía en una consigna velada a justificar el plan en términos acordes al peronismo, a la denominada «doctrina nacional». Martínez Zuviría hizo caso omiso de las especificaciones y solo presentó un listado de las actividades que la biblioteca realizaba normalmente —la publicación de la revista, la elaboración de ficheros y la organización de archivos— junto con una extensa lista de reclamos. El director de la biblioteca subvertía así la intención del gobierno de elaborar una política conjunta y la convertía en una oportunidad para dar mayor visibilidad a los problemas que aquejaban a la institución que dirigía. No justificaba la gestión de la biblioteca en términos doctrinarios peronistas ni proponía ninguna actividad que pudiera desviar a la biblioteca del rol de una institución pensada en función de la investigación¹⁵.

único autor que alrededor de los años treinta podía vivir de lo cobrado por sus obras (Gálvez, 1965, p. 337). En relación con esta vocación de educar a las masas se puede mencionar la participación de Martínez Zuviría en la revista *Argentina* auspiciada por el gobierno. El objetivo de esta era diseminar nociones de buen gusto entre los seguidores de Perón (Elena, 2010).

¹⁵ Carta de Martínez Zuviría a José Castiñeira de Dios, 22 de octubre de 1951. Libro de Correspondencia de la Biblioteca Nacional, Archivo Institucional de la Biblioteca Nacional, tomo I.

En el intento de llamar la atención sobre las deficiencias de la biblioteca, Martínez Zuviría no escatimaba juicios: «Estamos medio siglo en retardo sobre las otras naciones del continente americano», señalaba el director. «Casi todas [tienen] desde hace años el edificio de su biblioteca nacional en edificios modernos... y lo que más vale construidos para ese objeto». A pesar de las circunstancias familiares en las cuales estaba inmerso —su hijo mayor estaba detenido en el presidio de Rawson por haber participado del levantamiento militar contra el presidente Perón producido en setiembre de 1951—, la respuesta de Martínez Zuviría no debe interpretarse como de oposición (Moreno, 1962). No solo porque a fin de cuentas era un funcionario del gobierno que había expresado su adhesión al nuevo movimiento político, sino porque su postura era coherente con la visión de la biblioteca que venía sosteniendo hacía años: un espacio de trabajo para las élites cultas¹⁶.

Unos meses después, en junio de 1952, el director de la biblioteca recibió una resolución del Ministerio de Educación con un lenguaje hasta entonces inédito en la correspondencia oficial. En dicha comunicación, el ministro de Educación instaba a los directores de sus dependencias a «evitar toda filtración de funcionarios y docentes desleales o simplemente desafectos» y a «trabajar intensamente en el sentido de inculcar la doctrina justicialista» entre su personal. El ánimo de la circular estaba resumido en la advertencia que se daba al incumplimiento de las directivas: «cualquier actitud *contraria o tibia* que evidencia falta de decisión y energía en defensa de sus postulados [los de la doctrina justicialista], debe considerarse falta gravísima de deslealtad a la Patria y a sus instituciones». Finalmente se instruía a los directores a formar grupos para neutralizar y prevenir «el clima subversivo»¹⁷. La respuesta de Martínez Zuviría ante ese pedido fue declarar su fe peronista y la de sus empleados, pero sin comprometer acciones concretas dentro de la biblioteca¹⁸. Esta reacción esquiva se repitió en los años sucesivos hasta convertirse en abierta exasperación.

¹⁶ Martínez Zuviría fue el principal gestor de la revista cultural *Argentina*, financiada por el Ministerio de Educación y abiertamente adherida al gobierno. Fue cerrada de manera abrupta en 1950 (Magaldi, 1994; Elena, 2010).

¹⁷ Resolución, Ministerio de Educación, 6 de junio de 1952. Libro de Correspondencia de la Biblioteca Nacional, Archivo Institucional de la Biblioteca Nacional, tomo I, subrayado en el original. Esta orden formaba parte de un proceso más amplio que, a partir de 1952, buscaba otorgar menos independencia a la Dirección de Cultura y centralizar las decisiones en el Ministerio de Educación. Véanse Resolución del Ministerio de Educación del 22 de agosto de 1952, Resolución del Ministerio de Educación 22 de mayo de 1953 y Resolución del 17 de mayo de 1954, Archivo Biblioteca Nacional.

¹⁸ Carta de Martínez Zuviría al director de Cultura, 19 de junio de 1952, Libro de Correspondencia de la Biblioteca Nacional, Archivo Institucional de la Biblioteca Nacional, tomo I.

En 1953, ante el requerimiento de un informe por parte del recientemente nombrado director de Cultura, Raúl de Oromí, sobre cuáles eran los objetivos del Segundo Plan Quinquenal que la Biblioteca Nacional había conseguido cumplir, Martínez Zuviría respondió con una serie de proyectos —publicaciones sobre el peronismo, ficheros sobre la cultura autóctona, apertura de locales para la expresión de los obreros— que probablemente no pensaba llevar a la práctica. Mencionaba en dicho informe la colaboración de la biblioteca con la cultura popular al «asegurar las máximas facilidades para el acceso del público lector a las distintas dependencias de lectura e investigación de la casa»¹⁹. La viabilidad de dichos planes era escasa dadas las restricciones presupuestarias que pesaban sobre la institución, pero también porque no se condecían con el proyecto de Martínez Zuviría. Tan solo unos días antes, en la memoria enviada a la Dirección de Cultura, el director se había referido a la puesta en vigor de nuevas condiciones para acceder a la sala de investigadores. Un año después, probablemente ya cansado de los reiterados pedidos de informes de la Dirección de Cultura, Martínez Zuviría expuso abiertamente su opinión de que la biblioteca, dada su naturaleza, no podía integrarse a los objetivos del mencionado Plan Quinquenal:

La índole misma de los servicios que la Biblioteca Nacional presta al público, hace que muy poco sea lo que puede realizar en cumplimiento del mencionado plan, sin perturbar sus funciones específicas, lo que causaría graves inconvenientes para sus numerosos lectores. Lo único concreto y realmente valioso, que está a su alcance, son sus publicaciones, que, según tiene conocimiento están muy demoradas a causa de los severos decretos de economía, que se han dictado y deben cumplirse²⁰.

La provocadora contestación de Martínez Zuviría no solo revelaba una opinión que las elusivas respuestas anteriores a pedidos similares permiten pensar que no era nueva, sino que además mostraba que efectivamente, a fines de 1954, la Biblioteca Nacional no había sido «adaptada» a los objetivos del Segundo Plan Quinquenal²¹.

¹⁹ Carta de Martínez Zuviría al director de Cultura, 18 de agosto de 1953, Libro de Correspondencia de la Biblioteca Nacional, Archivo Institucional de la Biblioteca Nacional, tomo I.

²⁰ Carta de Martínez Zuviría al director de Cultura, 27 de agosto de 1954, Libro de Correspondencia de la Biblioteca Nacional, Archivo Institucional de la Biblioteca Nacional, tomo I.

²¹ Desde 1952, la Biblioteca debía enviar una comunicación mensual a la Dirección de Cultura con las actividades del mes referentes al Segundo Plan Quinquenal. No solo el director «olvidó» en reiteradas ocasiones enviar dicho informe sino que se negó a colaborar ante algunos de los numerosos pedidos del director de Cultura referente al tema. Por ejemplo, en noviembre de 1953, alegando escasez de personal, se negó a «prestar» funcionarios para actuar como asesores del Segundo Plan Quinquenal. Tan solo unos meses después, le recordó al director de Cultura que no era posible realizar conferencias o cursos en la Biblioteca porque esta «no cuenta con los locales adecuados»

La respuesta del director de la biblioteca derivó en una inspección a la institución cuyo informe final no hizo más que corroborar los sucesivos pedidos del director, al ratificar «la necesidad absoluta, urgente, impostergable e inmediata, de encarar [...] el problema del edificio»²².

La gestión de Martínez Zuviría concluyó abruptamente en marzo de 1955 como producto del conflicto desatado con la Iglesia católica, el cual derivó en el retiro de los nacionalistas del gobierno. En ese momento, se ordenó la intervención de la biblioteca y se nombró al joven historiador y bibliógrafo José Luis Trenti Rocamora como su director, y se advirtió, como se indicó en la introducción, que hasta entonces la biblioteca no había sido adaptada a los objetivos del peronismo. Trenti Rocamora, un estudioso de la temática colonial, había sido, desde 1950 y hasta el momento de su nombramiento en la Biblioteca Nacional, director del Museo Histórico Nacional; allí había realizado el primer inventario de esa institución. Cabe destacar aquí que el desplazamiento de Martínez Zuviría se debió a motivos ajenos a su política bibliotecaria o a su resistencia a adecuar la institución a los objetivos del Plan Quinquenal. Su suerte derivó de su afiliación a un grupo con el cual el gobierno se enemistó. ¿Cómo evaluar su gestión? ¿Cómo explicar la capacidad de Martínez Zuviría de hacer de la biblioteca *su* proyecto? Es factible pensar que la falta de alineación de la Biblioteca Nacional con algunas políticas estatales demostraba la ausencia de una voluntad política en la materia. Es probable que esto fuera así porque el mismo diagnóstico del director de la biblioteca era compartido por aquellos encargados de delinear una política cultural. Según estos funcionarios, la Biblioteca Nacional, en virtud de su naturaleza, no era ni podía ser un agente de transformación social. La falta de presupuesto y la marginalidad de dicha institución —que por cierto no eran nuevas— no respondían a un desdén por la cultura ni a un conflicto entre los valores asociados a práctica de la lectura y aquellos de las clases populares, sino a su escasa plasticidad para proyectarse en «función de un servicio social», tal cual lo estipulaba el Segundo Plan Quinquenal. Esta visión, aunque no necesariamente correcta —como mencionamos antes, una biblioteca es una cosa proteica, y esta puede amoldarse a distintos objetivos—, permite explicar la sorprendente discrecionalidad de Martínez Zuviría. Dicha perspectiva del gobierno sobre las bibliotecas del Estado resulta evidente si se la contrasta con la suerte de las bibliotecas populares, las cuales recibieron un considerable apoyo estatal como se puede ver en la próxima sección.

(Carta de Martínez Zuviría al Director de Cultura, 17 de noviembre de 1953, y Carta de Martínez Zuviría al Director de Cultura, 6 de abril de 1954, Libro de Correspondencia de la Biblioteca Nacional, Archivo Institucional de la Biblioteca Nacional, tomo I).

²² Informe incluido en la carpeta del Libro de Correspondencia de la Biblioteca Nacional, Archivo Institucional de la Biblioteca Nacional, tomo I, 1954.

LIBROS PARA EL PUEBLO: LA COMISIÓN NACIONAL DE BIBLIOTECAS POPULARES²³

La CONABIP, en 1946, era una vieja institución con una actuación dispareja. Siguiendo las recomendaciones propuestas por Horace Mann, Domingo Faustino Sarmiento fundó en 1870 una dependencia estatal destinada al «fomento, la inspección y la inversión de fondos destinados a las bibliotecas populares», es decir a aquellas bibliotecas que surgían de la iniciativa de pobladores²⁴. Concretamente, el Estado se comprometía a girar a cada biblioteca una suma de dinero igual a la que esta había sido capaz de recaudar. El proyecto representaba la convicción de la capacidad transformadora de los libros y constituyó un capítulo vital de la utopía educadora liberal. La idea era promover una institución que remitía a la apertura, al dinamismo comunitario, a la asimilación del extranjero y a la conversión del ciudadano; que buscaba que todos accedieran al libro, incluso a su préstamo, que constituía «un pacto ético» (Clementi, 1992). Buscaba también enmendar las desigualdades regionales con respecto al acceso a la lectura (Romero, 1995; Chartier & Hebrard, 1994, p. 147; González, 1990)²⁵. Tampoco estaba ausente en la fundación de la CONABIP la preocupación por los virtuales efectos nocivos de una lectura sin control. Esta institución buscaba asegurar al Estado la capacidad de participar en el proceso central de este dispositivo cultural: el de «acompañar» al lector (Chartier & Hebrard, 1994, p. 120). La atribución de «vigilar» quedaba legislada al definir como una de las funciones de la Comisión el «inspeccionar» las bibliotecas. Es decir, la fundación de la Comisión remitía a una visión de la biblioteca como un «agente de cultura» pero también de control social, capaz de proyectarse en una multiplicidad de roles.

A pesar de que sus años iniciales fueron poco auspiciosos, la CONABIP ha funcionado hasta nuestros días, aunque con algunas interrupciones (Veneroni, 1995, p. 37). Cerrada en 1876 dada su incapacidad de llevar adelante sus objetivos y debido a algunos conflictos que suscitó, fue reabierta en 1908 por iniciativa del presidente José Figueroa Alcorta. Dicha reapertura significó un periodo más estable, sobre todo porque se aseguró su presupuesto al asignársele el importe de los premios de la Lotería Nacional no pagados. En 1919, durante la presidencia de Hipólito

²³ Esta sección reproduce, con ligeras variantes, el texto publicado en 2009 como «La cultura, el libro y la lectura bajo el peronismo: el caso de la Comisión de Bibliotecas Populares». *Desarrollo Económico*, 48(192), enero-marzo, 543-556.

²⁴ Ley 419.

²⁵ Se ha dicho que la biblioteca popular constituye un espacio vital de la sociabilidad barrial y está más preocupada por los lectores que por los libros. González (1990) grafica esta paradoja al afirmar que era más importante tener los libros que leerlos.

Yrigoyen, se terminó de darle un marco legal al sancionarse un decreto que fijaba sus atribuciones y facultades. La normativa era precisa sobre el carácter regulador que debía ejercer la Comisión, cuyo objetivo era:

Preocupar[se] de que los libros que se adquirieran para las bibliotecas populares, además de responder a las exigencias de la cultura científica, artística y literaria, tiendan a desarrollar el sentimiento nacional y a fortificar la voluntad y el carácter, y que también deben contribuir al desarrollo de los conocimientos útiles y de aplicación práctica, consultando necesidades de las diversas regiones de la república (Decreto del 31 de marzo de 1919).

El decreto hacía hincapié en la dicotomía entre libros útiles e inútiles y la lectura «buena o nociva» para las clases laboriosas. El proyecto estatal buscaba crear un sistema de bibliotecas «controlado», ligado a una concepción de la lectura conforme a la idea de utilidad social y construcción de la nacionalidad. El sistema de auspicios que propiciaba la Comisión de Bibliotecas era complejo, porque si bien las bibliotecas que ella amparaba seguían siendo institucionales comunitarias y no estatales, la ayuda oficial abría la posibilidad de un abanico de tensiones, sobre todo con respecto al grado de autonomía con que las bibliotecas podían manejarse. ¿Cómo decidir cuándo un libro era útil para una determinada comunidad? ¿Quién tenía la última palabra para definir dicho criterio y quién sabía más al respecto? ¿La comisión directiva de la biblioteca de un pueblo o los miembros de una institución cuya sede estaba a veces a miles de kilómetros? Pese a la presencia de ese rasgo potencialmente conflictivo y aun reconociendo que es muy poco lo que sabemos sobre la labor diaria de la Comisión de Bibliotecas, es plausible sospechar que esta fue más aceptada que resistida, pues el subsidio oficial era un fuerte incentivo a la hora de consentir la injerencia estatal. En 1926 la CONABIP auspiciaba 1177 bibliotecas diseminadas por todo el país. Para cuando Perón se convirtió en presidente, en 1946, esta subsidiaba aproximadamente 1500 bibliotecas²⁶.

El peronismo no solo continuó con este proyecto de difusión de la lectura que conjugaba esfuerzos privados y estatales sino que le dio nuevos bríos. La continuidad vuelve a aparecer aquí como un rasgo distintivo, continuidad que

²⁶ Según estadísticas de la propia Comisión en 1947, la Comisión auspiciaba 1508 bibliotecas. El boletín de la institución brinda información sobre la distribución de las bibliotecas populares en el territorio nacional. A la cabeza se encuentra la provincia de Buenos Aires con 353 bibliotecas, seguida por la provincia de Santa Fé con 238 y Entre Ríos con 176. En sus antípodas se encuentra el entonces territorio nacional, Formosa, con tan solo una biblioteca. Es posible observar una clara vinculación entre el número de bibliotecas populares y la proporción de población de origen extranjero. Para mayores datos, véase CONABIP, 1948a.

se puede observar en varios ámbitos²⁷. El presidente de la CONABIP siguió siendo el mismo: el profesor universitario y poeta católico Carlos Obligado. Este personaje asumió el cargo de director en 1944, luego de haber sido por quince años vocal y vicepresidente, y permaneció en el puesto hasta que falleció en 1949. Su participación retomaba un mandato familiar, pues anteriormente su padre, el escritor Rafael Obligado, había ejercido funciones directivas en la Comisión. Obligado concentró sus esfuerzos en dinamizar la institución, lo que significaba modernizar e incrementar el número de bibliotecas protegidas. La creación de una Biblioteca del Bibliotecario, destinada a informar sobre las novedades bibliotecológicas, el temario de los programas que esta institución tenía en radio del Estado —entre ellos un ciclo destinado a enseñar las técnicas de la catalogación—, junto con la creación de un archivo estadístico, hablan de la «modernidad» que Obligado quería imprimir al movimiento de bibliotecas populares. Al igual que Martínez Zuviría, Obligado otorgaba a la catalogación un papel preponderante en la renovación de una biblioteca.

Obligado comulgaba abiertamente con el ideario con el que la Comisión se había fundado. En 1948, al publicar por primera vez la revista de la institución, reprodujo en su tapa un extracto del discurso de Nicolás Avellaneda al sancionarse la ley 419, el cual resumía los principios cardinales de la Comisión: «El que da un libro para el uso del pueblo hace el pequeño don de su valor pecuniario y enciende una antorcha perenne, y abre una puerta de elevados sentimientos, *para ilustrar y regenerar* la existencia moral e intelectual de centenares de hombres» (Avellaneda, 1948, p. 1). Esto quiere decir que Obligado no tenía dudas de que la biblioteca constituía un instrumento para la pedagogía de las masas, aunque no descartaba su potencial subversivo. La segunda nota del número inaugural de la revista de la Comisión fue un artículo firmado por el crítico Carmelo M. Bonet sobre el libro y sus problemas, en el que se advierte sobre los efectos de una lectura sin «equilibrio, sin [una] inteligencia que jerarquice lo leído» capaz de «producir indigestados, veletas intelectuales que van a la zaga de los últimos autores leídos». Esto era peligroso, concluía, porque entre «los indigestados se reclutan estos tráfugas que hoy son anarquistas, mañana comunistas y pasado mañana católicos ultramontanos» (Bonet, 1948, p. 3). El comentario refleja tanto la tensión intrínseca al proyecto de difundir la cultura entre los sectores populares como las ansiedades que este despertaba. Si bien había consenso sobre la necesidad de educar a las clases populares, la lectura constituía un mecanismo de igualación y emancipación que tendía a minar las jerarquías sociales.

²⁷ Esta situación contrasta con lo que fue la norma en otros ámbitos de la gestión estatal bajo el peronismo, donde se produjo, al menos en forma parcial, una renovación de los elencos estatales.

Tan solo dos meses antes de que Perón asumiera la presidencia, un extenso decreto reguló nuevamente el funcionamiento de la CONABIP. El mismo renovaba los objetivos ya contemplados en la ley 419, pero agregaba un capítulo sobre las inspecciones que facultaba a la Comisión a valerse de las autoridades escolares zonales o los jefes de reparticiones nacionales para realizar la inspección de bibliotecas²⁸. El decreto representaba un avance para la Comisión porque implicaba un importante progreso en la capacidad de «controlar» y fue también el comienzo de un periodo próspero para el movimiento de bibliotecas populares. Como se indicó antes, durante el peronismo las bibliotecas populares vivieron una notable expansión. El ciclo cerró con más 1600 bibliotecas subvencionadas que resultaron en 5 535 521 visitas, según estadísticas del año 1954²⁹.

La aparición en 1948 de la revista de la institución debe ser interpretada como un signo del ímpetu que adquirió la labor de la Comisión en esos años, ya que dicha publicación representaba, según su director, «una voluntad de crecimiento» y, sin lugar a dudas, una erogación importante (Obligado, 1948, p. 1)³⁰. Respondía a un esfuerzo por hacer llegar la voz de la Comisión —sobre todo los impulsos modernizadores de su presidente— a todas las bibliotecas populares, a las cuales estaba destinado el cuadernillo. El signo más elocuente de que el peronismo implicaba un cambio para esta dependencia, sin embargo, fue el aumento del presupuesto en 1947, lo que, según Obligado, significaba «la desaparición de las dificultades económicas con las que tropezaba» la institución. El presupuesto de la Comisión fue reforzado en 2 268 630 pesos en junio de 1947, resolución que se fundaba en «el empeño del gobierno de concurrir al sostenimiento de las instituciones que cumplen fines de acción cultural». Esto significaba concretamente un aumento de las partidas destinadas al subsidio de bibliotecas que pasaba de ser 1 309 935 pesos a 3 578 865, cifra igual a la que recibía la Subsecretaría de Cultura para todas sus dependencias³¹. Resulta pertinente recordar que la Biblioteca Nacional vivió exactamente la situación contraria: su presupuesto fue disminuido.

La positiva recepción de las medidas introducidas por el nuevo gobierno puede ser leída en las conclusiones del Primer Congreso Nacional de Bibliotecas Populares

²⁸ Decreto 9241 del 11 de abril de 1946.

²⁹ De acuerdo con cifras de 1954, eran 1623 las bibliotecas subvencionadas. La incorporación de más de un centenar de bibliotecas en el lapso de menos de una década no es desdeñable.

³⁰ La revista, destinada a ser circulada entre las bibliotecas populares y presentada como «vocero oficial de cuanto suceda en el seno de la Comisión», reunía diversas intervenciones que iban desde la crítica de libros y la información sobre algunas bibliotecas hasta notas más técnicas sobre qué debía hacerse para atraer lectores.

³¹ La Comisión de Bibliotecas era la única dependencia de la Subsecretaría de Cultura que tenía un presupuesto independiente.

que se realizó en Córdoba del 9 al 12 de octubre de 1948, subvencionado por las cámaras de Diputados y Senadores de la Nación. Las distintas comisiones discutieron sobre aspectos técnicos, la misión de las bibliotecas populares y su accionar, su futuro y el gremio de bibliotecarios, y se detuvieron de forma particular en su relación con el pueblo, la cultura nacional y el Estado (CONABIP, 1948b). El despacho de la Comisión Sexta del Congreso fue explícito a la hora de «apoyar y aplaudir la política del gobierno nacional en sus aspectos de fomento de las bibliotecas populares, concretado en el aumento de los subsidios y la reestructuración de la Comisión de Bibliotecas Populares». Sin embargo, también aparecía entre estas resoluciones la defensa de ese principio tan caro a las bibliotecas populares como era la defensa de su autonomía. Si bien el congreso aconsejaba la sanción del estatuto del bibliotecario y del personal de las bibliotecas populares, lo hacía subrayando que se debía mantener como principio fundamental la independencia de las mismas. Evidentemente los bibliotecarios identificaban la sujeción como una amenaza del peronismo, aun cuando saludaran las medidas implantadas por el gobierno. Sin embargo, los comentarios que aparecieron en la revista de la Comisión no cuestionaban sino resaltaban el carácter «particular» (independiente) de las bibliotecas populares aunque «su desenvolvimiento y progreso solo [sea] realmente posible cuando media el sostén del Estado» (CONABIP, 1948b, p. 38). La defensa de la autonomía no solo fue un principio invocado sino también ejercido durante el encuentro en Córdoba. El congreso cerró con un pedido para que se gestionara la libre lectura del libro de Juan Bautista Alberdi, *El crimen de la guerra*, que los asistentes al congreso erróneamente creían prohibido. Uno de los frutos del encuentro aquí mencionado fue la creación de una Federación de Bibliotecas Populares, cuya misión era promover la vinculación entre las propias bibliotecas. En su estatuto se volvía a invocar indirectamente el principio de la autonomía, al declararse ajena a cuestiones políticas, religiosas o de nacionalidad, y afiliarse, en cambio, al respeto y la defensa de la tradición cultural de Mayo.

El impacto de la ampliación del presupuesto fue inmediato. La memoria del año 1948 registra los avances que con el mismo se habían logrado; el más evidente fue el aumento del número de lectores y el acervo agregado a las bibliotecas³². Sin llegar a consolidar los mencionados logros, Obligado murió en 1949. En su reemplazo, tras un breve interludio, fue nombrado el escritor de obras de tono social Horacio Velázquez. Este último era un ex obrero frigorífico y no era un escritor conocido.

³² La memoria destaca el aumento de más de 250 000 ejemplares y, aunque admite que el aumento de entidades patrocinadas se ha desacelerado con respecto al año anterior, esto se debe a que se prefiere conceder la protección legal a las bibliotecas que tengan méritos para recibir dicha ayuda (CONABIP, 1949, p. 75).

Es probable que haya llegado a la Comisión por haber obtenido ese año el primer premio del concurso literario de la provincia de Buenos Aires por su obra *Pobres habrá siempre* (1952)³³. A pesar de que sus orígenes lo colocaban en las antípodas sociales de Obligado —hijo, este, de un reconocido literato, uno de los fundadores de la Facultad de Filosofía y Letras y dueño de estancias—, Velázquez continuó al pie de la letra la obra de su predecesor, que finalmente era una continuación del proyecto de Sarmiento. Tanto es así que no dudaba en invocar al autor de *Facundo* a la hora de explicar su gestión. Compartía con el prócer educador la visión de la biblioteca a la cual describía como un «resorte activo de civilización y entendimiento», «que no debe faltar a ningún pueblo que se estime y que desee ilustrarse». Participaba también de la idea sarmientina de la necesidad de que la lectura popular fuese intervenida. Así, advertía que «cuando [Sarmiento] ‘pedía libros’ [este] agregaba con conciencia: ‘pero adecuados, metódicamente distribuidos’» (Velázquez, 1955, p. 119). Claramente, el proyecto inicial de la Comisión era lo suficientemente vago para servir de plataforma a programas de distintos contenidos; por lo tanto, la pregunta que nos debemos hacer es si la biblioteca popular y sobre todo la Comisión fueron usados como agentes de manipulación, propaganda o simplemente difusión de una serie predeterminada de símbolos o mensajes culturales, tal como sucedió, por ejemplo, con el movimiento de bibliotecas públicas en Estados Unidos durante las dos guerras mundiales o, asumiendo caracteres más siniestros, en la Alemania nazi (Stieg, 1992; y Wiegand, 1950). En otras palabras, ¿cómo leer esta importante inversión del peronismo en el área de la lectura popular? ¿Significó el impulso al movimiento de bibliotecas populares un cambio en los valores y prioridades de la CONABIP?

Los numerosos legajos sobre cada una de las bibliotecas protegidas que guarda la Comisión en su sede son un valioso testimonio para observar este microcosmos tan peculiar. Los mismos desestiman la tesis de que dichas instituciones fueron utilizadas unilateralmente como vehículos para difundir un mensaje específico, ya sea cultural o político. Una forma de observar el grado de autonomía ideológica que tuvieron las bibliotecas populares —al menos con respecto a la CONABIP, ya que no se pueden descartar posibles tensiones con los poderes locales— puede advertirse en los informes que los inspectores enviaban a la mencionada institución. El formulario que el inspector actuante debía llenar establecía una serie de preocupaciones que dejaban poco lugar a las reflexiones de tipo más ideológico o político. El mismo buscaba evaluar si la biblioteca cumplía la función social que justificaba el subsidio. Este incluía, por lo tanto, consideraciones sobre el horario de apertura, el número de libros y lectores, el personal, la organización administrativa, la higiene del local y

³³ La obra fue llevada al cine por Carlos Borocosque en 1954.

las actividades que la misma realizaba. Unos pocos renglones para observaciones del inspector era el único espacio en donde este podría explayarse hacia otras cuestiones. Por lo general primaba la voluntad de proteger una institución comunitaria³⁴. La falta de inspectores propios hacía que los mismos informes fuesen esporádicos y su calidad dependiese de la buena voluntad de los funcionarios actuantes, quienes muchas veces carecían de los conocimientos técnicos para evaluar el funcionamiento de la biblioteca —por ejemplo, sus procesos de catalogación—. Por lo tanto, el intento de controlar la lectura, aunque expresado como una función fundamental de la Comisión, no tuvo durante el periodo aplicación práctica³⁵. Esta situación se explicaba por la falta de recursos, por la misma organización de las inspecciones, así como por la falta de voluntad estatal. Los comentarios de los inspectores son reveladores de las distintas valoraciones sobre lo que era una biblioteca ideal —sobre todo en lo que concierne a las lecturas adecuadas— y del alto prestigio que la cultura letrada aún conservaba en los sectores populares³⁶.

El escaso control de la CONABIP sobre el accionar de las bibliotecas populares se advierte también en la falta de una política centralizada de adquisiciones. Esta compró todos aquellos libros que las bibliotecas pidieron sin ejercer censura o presiones, por lo que las colecciones eran tan heterogéneas como las mismas bibliotecas que las sustentaban³⁷. Los legajos guardan las listas de libros requeridas por las bibliotecas: abundan los textos escolares pero tampoco faltan las obras de ficción de autores locales y extranjeros, entre los que se puede mencionar a modo de ejemplo las *Rimas* de Bécquer, *Robinson Crusoe* de Defoe, *Divertidas aventuras del nieto de Juan Moreira* de Payró y clásicos nacionales como los textos de Sarmiento,

³⁴ El rubro observaciones en general enumeraba las necesidades a futuro de la biblioteca. Véase, por ejemplo, Caja 1140, expediente 330, Archivo de la Comisión de Bibliotecas Populares. Las estadísticas de 1948 informan hasta ese año y desde 1910 se cerraron 817 bibliotecas por no funcionar en las condiciones reglamentarias. Véase CONABIP, 1948a (p. 90).

³⁵ Es probable que el control de la lectura haya sido un objetivo que nunca la Comisión pudo llevar adelante, dado que contaba con una burocracia de pocas dimensiones y sin inspectores propios. Por otro lado, las colecciones de las bibliotecas eran muy heterogéneas porque estas dependían en gran medida de la incitativa de sus socios; así, resulta imposible hablar de la colección típica de una biblioteca popular. Este tema aguarda estudios específicos.

³⁶ Caja 1140, Biblioteca 1141, Expediente 330, Letra B, Archivo de la Comisión de Bibliotecas Populares. La ubicuidad de las bibliotecas populares en los barrios es un dato que no puede ser ignorado a la hora de hacer un balance del estatus de la cultura letrada en los sectores populares. Incluso, como nos advierte Luis Alberto Romero, aún la escasa actividad de lectura es prueba misma de la reputación de la cultura letrada: el libro es el agente legitimador de esa sociabilidad barrial (Gutiérrez & Romero, 1989, p. 55).

³⁷ Debe tenerse en cuenta que la selección del material en las bibliotecas populares estuvo sujeta muchas veces a una lógica más acumulativa que selectiva, entre otras cosas porque las donaciones eran una importante forma de aumentar el acervo.

Alberdi y Almafuerte³⁸. Tampoco hubo un plan para prohibir o dificultar ciertas lecturas ni tampoco para promocionarlas, y aunque es plausible sospechar que por los anaqueles de las bibliotecas populares circulaba material de propaganda peronista —una de las primeras acciones de la CONABIP luego de la Revolución libertadora fue ordenar el retiro de dicho material—, su distribución no fue promovida sistemáticamente por la Comisión. Por el contrario, eran las bibliotecas mismas las que reclamaban el envío de un ejemplar de *La razón de mi vida* de Eva Perón o el retrato de Perón para colgar en las paredes³⁹. La falta de centralización se puede observar en la nula injerencia que la Subsecretaría y la Dirección de Cultura tuvieron en el accionar de esta institución. No hubo ni directivas ni instrucciones a la Comisión, ni tampoco se distribuyeron libros que pudieran ser asociados —usando el lenguaje del gobierno— a la «cultura autóctona».

A pesar de esta falta de sujeción ideológica, del importante grado de autonomía del movimiento de bibliotecas populares y del aumento de los subsidios, sería erróneo, como se dijo arriba, descartar cualquier tipo de tensiones y problemas, incluso en el aspecto económico, principalmente por el atraso en los pagos. No solo los legajos de la Comisión testimonian ciertas dificultades, sino que estas también se pueden percibir en fuentes como el archivo epistolario que guarda las cartas de la población en ocasión de la invitación oficial a hacer sugerencias para ser incorporadas al Plan Quinquenal. Por ejemplo, este da cuenta de que a la Biblioteca Popular Mariano Moreno de Clodomira (Santiago del Estero) se le otorgó en 1948 un subsidio para ampliar el edificio, pero, hasta 22 de diciembre de 1951, cuando se hace el reclamo, el mismo no había sido pagado⁴⁰. También es posible percibir ciertas arbitrariedades. Algunas bibliotecas lograron rápidamente el subsidio de la CONABIP, como el caso de la biblioteca de la Confederación Obrera o de las «Bibliotecas circulantes 17 de octubre» (un carrito que recorría las calles de Berisso), mientras otras veían sus subsidios recortados o esperaban varios años para recibir el aval estatal⁴¹. Lo notorio es que no estuvo en la agenda del gobierno transformar las bibliotecas populares en agentes de propaganda peronista. Perón afirmó en el discurso que clausuraba el primer Congreso de Bibliotecarios realizado en el país en 1954 que, finalmente, «la ejecución [de una idea] es lo que cuenta y la ejecución está en manos de los bibliotecarios», ya que es el bibliotecario «el que le da vida a la

³⁸ La selección de libros requeridos estaba muy relacionada con el tipo de biblioteca —escolar, de club, de una asociación—, del barrio y el tipo de lectores de la misma.

³⁹ Véase, por ejemplo, Legajo 189, Letra B, Archivo de la Comisión de Bibliotecas Populares.

⁴⁰ Fondo Documental de la Secretaría Técnica del Estado, Legajo 137.

⁴¹ Una foto de estas bibliotecas circulantes se puede ver en CONABIP, 1954-1955.

biblioteca» y estos habían aclarado, en el Primer Congreso de Bibliotecas Populares en 1948, que estaban afiliados a la tradición liberal de Mayo⁴².

Lo que emerge de esta descripción es que las bibliotecas populares fueron apoyadas por el gobierno peronista pero que dicho auspicio no se tradujo en sujeción ideológica. En otras palabras, no hubo desde las bibliotecas una política que intentó intervenir sobre las lecturas⁴³. Esto es muy distinto a lo que sucedió en el área de educación, donde la escuela estuvo sometida a una progresiva centralización y fue utilizada como una herramienta clave en el adoctrinamiento de la población⁴⁴. No obstante, el apoyo a las bibliotecas populares puede ser visto como un avance del Estado hacia la sociabilidad del barrio e incluso hacia la campaña rural. Este avance también se advierte en otras iniciativas del gobierno como la apertura de unidades básicas barriales, la creación de misiones monotécnicas que se proponían educar al campesinado rural y en los diversos proyectos encarados por la Subsecretaría de Cultura tendientes a extender el consumo cultural más allá de los círculos tradicionales y de la ciudad de Buenos Aires⁴⁵. El caso aquí estudiado nos indica que la capacidad de los sectores populares para «beneficiarse» del peronismo no debe ser automáticamente asociado con afiliación o sujeción política, ni toda política estatal a la búsqueda —al menos inmediata— de adhesión⁴⁶.

⁴² *Desarrollo Económico*, 13 de abril de 1954, p. 1.

⁴³ Es preciso advertir que, según la carta orgánica del partido peronista, las unidades básicas debían poseer una biblioteca. Se puede interpretar este requisito como otra forma en que el peronismo demostró su interés por extender la cultura, en particular la práctica de la lectura, a los sectores bajos. Nicolás Quiroga advierte que el control sobre las unidades básicas fue muy difuso y que, en términos de sus funciones y su organización interna, estas constituyeron un conjunto de agrupaciones muy heterogéneo. Teniendo en cuenta estas características, se hace difícil pensar que el peronismo haya usado estas instituciones para controlar aquello que se leía. Al igual que para el caso de las bibliotecas populares, el peronismo buscaba que las unidades bases ayudaran a promover la práctica de la lectura, pero no se advierte una política que promoviera ciertas lecturas sobre otras (Quiroga, 2008).

⁴⁴ Sobre este tema, véase Plotkin, 1994, p. 276.

⁴⁵ Las misiones monotécnicas llegaban al campo para enseñar técnicas agrícolas, artesanía, nociones de economía y también organizaban una biblioteca y una discoteca. Para un ejemplo de las iniciativas de llevar cultura más allá de Buenos Aires (*Mundo Peronista*, 1951).

⁴⁶ Según Omar Acha (2004), bajo el peronismo se dio la paradójica convivencia de una «hegemonía autoritaria» con una sociedad civil activa; el autor sostiene que solo en sus días postreros el peronismo intentó un mayor control de las asociaciones barriales. Cabe mencionar que algunos bibliotecarios advertían que el avance estatal hacia la sociabilidad barrial representaba una amenaza para la práctica de la lectura. Uno de ellos estimó que si bien la merma de lectores tenía diversas explicaciones, esta también se asociaba a actividades que debían su auge al apoyo estatal: «los deportes intensificados en los últimos años»; «la exagerada cantidad de diarios y sobre todo revistas que se editan en el país y cuya difusión —invadiendo totalmente los distintos sectores de la población— alejan al lector de la natural concentración y esfuerzo que supone la lectura atenta de un volumen» y la expansión

¿Puede leerse la expansión y el respeto de la autonomía de las bibliotecas populares como representativa de la política cultural del régimen? Hasta cierto punto lo que sucede con las bibliotecas populares se ajusta a un patrón común a la hora de hacer un balance del peronismo: los éxitos del gobierno se asocian a sus afanes democratizantes y estos últimos están cargados de significado político. Sin embargo, debemos resaltar el hecho de que el apoyo a las bibliotecas —institución centrada en la idealización de la cultura escrita— concuerda con una representación jerárquica de la cultura, que se sostiene en una visión tradicional de la relación entre clase y cultura (Okada, 2005). En cuanto a la vocación autoritaria, lo que sucede con las bibliotecas populares nos permite matizar los impulsos autoritarios del peronismo en torno a la letra impresa⁴⁷. Uno de los hitos fundacionales y ciertamente premonitorios en muchos sentidos del nazismo fue la quema de libros el 10 de mayo de 1933. La destrucción de libros considerados comunistas o judíos se volvió una práctica corriente y a esta se le agregaron la confiscación de bibliotecas, la persecución a editores, libreros y autores, y la censura de obras (Hill, 2001, pp. 9-45). Nada de esto sucedió en la década que va desde 1945 a 1955. Si la comparación con el nazismo parece exagerada, tal vez sirva aclarar que la administración que siguió a la de Perón sí intentó «extirpar» ciertas publicaciones, incluso, como fue anteriormente mencionado, de las mismas bibliotecas populares.

A MODO DE CONCLUSIÓN

La Comisión Nacional de Bibliotecas Populares fue fundada bajo la creencia de que la lectura constituye un mecanismo efectivo para civilizar y controlar a las masas. El peronismo no hizo más que ahondar en este capítulo tan importante para el credo liberal. Lo hizo, además, sin avasallar la libre iniciativa de estas instituciones y sin intentar imponer desde las mismas un determinado set de valores, ni siquiera de lecturas apropiadas. La Biblioteca Nacional continuó proyectándose, en gran medida por los esfuerzos de su director, como un recinto para las élites intelectuales. Esta visión fue resistida en el día a día por un numeroso grupo de escolares que la utilizaron para realizar tareas menos grandilocuentes que las imaginadas por su director. El hecho de que el peronismo no haya cambiado a quienes estaban al frente de estas dependencias es sintomático de la continuidad. Los apoyos desiguales se

del «cinematógrafo». Legajo 373, Letra E, Informe de la Biblioteca Primero de Mayo (ER), 16 de febrero de 1955, Archivo de la Comisión de Bibliotecas Populares.

⁴⁷ El peronismo utilizó diferentes estrategias para controlar la prensa. El incumplimiento de ordenanzas municipales, la distribución del papel, los juicios por desacato y las presiones económicas fueron algunas de estas. Para un resumen de los conflictos con la prensa, véase Sirvén, 2011 (pp. 51-204).

ajustan pero también *niegan* aquello que distingue al peronismo en otros ámbitos y que igualmente ha sido señalado por la crítica como lo distintivo de la política cultural: el esfuerzo en pos de la democratización⁴⁸. El recorrido de este trabajo, a la vez que muestra la concentración de esfuerzos en una institución más acorde al objetivo de democratizar la cultura —la biblioteca popular—, nos advierte sobre los estrechos límites de este proceso. En este caso vemos que la democratización se detiene en aquel espacio donde un miembro de la élite alza su voz de alarma. La política más democrática con respecto al acceso al libro no llega al punto de apoyar una reforma de la Biblioteca Nacional, lo que revela las limitaciones del proyecto: la Biblioteca Nacional fue aquello que pudo y quiso hacer su director, alguien que no escondía sus aprehensiones elitistas. La crítica especializada destaca como distintivo del peronismo el compromiso con un uso desjerarquizado —al menos en términos simbólicos— del espacio público urbano. Según Anahí Ballent, a través de una serie de operaciones como la organización de espectáculos en las calles, el peronismo «tendía a reafirmar el mito del 17 de octubre: la irrupción de las masas en [el centro de] la ciudad, que significaba a la vez su irrupción en la política» (Ballent, 2005, p. 51).

Paradójicamente, lo observado para el caso de las bibliotecas pone en cuestión la vocación democratizadora: la Biblioteca Nacional no podía adaptarse para usufructo de las masas, a estas era mejor reservar las bibliotecas barriales. No hubo, por lo tanto, en torno al objetivo de la democratización, una política cultural unificada sino esfuerzos a veces convergentes pero otras veces contradictorios. Una serie de notas en la revista *Mundo Peronista* advierten que las limitaciones del proyecto no eran ajenas a otros ámbitos del espacio público, como era por ejemplo la política en torno a los monumentos, la cual también debía ser coordinada por la Subsecretaría de Cultura a través de la Comisión Nacional de Monumentos y Lugares Históricos. La primera de las notas comenzaba con un interrogante que permitía adivinar el reproche de promesas incumplidas y reformas a medio camino: «¿Qué piensa el pueblo de los monumentos que adornan la ciudad, ahora que es *dueño de la ciudad*?». «La pregunta parecerá peregrina —decía el periodista— *pero no es tal*». Mientras recorría con un supuesto vendedor de helados la ciudad de Buenos Aires, llegaban juntos a la conclusión de que «artística y ornamentalmente el Pueblo está ausente en estos paseos». La publicación no solo denunciaba las desigualdades precedentes

⁴⁸ Esto mismo confirma, como lo advierten Pastoriza & Torre (1999), que la experiencia de movilidad social traída por el peronismo «se produjo con el telón de fondo de la gravitación de una élite aristocratizante, cuyo difuso y abarcador poder moral y cultural fue simultáneamente objeto de admiración y de resentimiento».

en la conformación del patrimonio, sino que se advertía que, todavía a fines de 1951, esto mismo no había sido revertido⁴⁹.

BIBLIOGRAFÍA

- Acha, Omar (2004). Sociedad civil y sociedad política durante el peronismo. *Desarrollo Económico*, 44(144), pp. 199-230.
- Augst, Thomas (2001). Introduction. American Libraries and Agencies of Culture. *American Studies*, 42(3), 5-22.
- Avellaneda, Nicolás (1948). El libro y su lectura. *Revista de la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares*, 1, abril-junio.
- Ballent, Anahí (2005). *Las huellas de la política. Vivienda, ciudad, peronismo en Buenos Aires, 1943-1955*. Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes.
- Berrotarán, Patricia (2003). *Del plan a la planificación: el Estado durante la época peronista*. Buenos Aires: Imago Mundi.
- Biblioteca Nacional (1933). *La Biblioteca Nacional en 1932. Memoria elevada al Excmo Señor Ministro de Justicia e Instrucción Pública Dr. D. Manuel M. de Iriondo*. Buenos Aires: Imprenta de la Biblioteca Nacional.
- Biblioteca Nacional (1936). *Memoria de la Biblioteca Nacional, 1935*. Buenos Aires: Imprenta de la Biblioteca Nacional.
- Biblioteca Nacional (1948). *La Biblioteca Nacional en 1947*. Buenos Aires: Imprenta de la Biblioteca Nacional.
- Biblioteca Nacional (1949). *La Biblioteca Nacional en 1948*. Buenos Aires: Imprenta de la Biblioteca Nacional.
- Bonet, Carmelo M. (1948). El libro y sus problemas. *Revista de la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares*, 1, abril-junio.
- Bruno, Paula (2005). *Paul Groussac. Un estrategia intelectual*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- Chartier, Anne Marie & Jean Hebrard (1994). Génesis de las concepciones republicanas sobre la lectura pública. En Anne Marie Chartier & Jean Hebrard (eds.). *Discursos sobre la lectura* (pp. 118-150). Barcelona: Gedisa.

⁴⁹ *Mundo Peronista*, 1952. El perspicaz cronista advierte que la respuesta del pueblo no era la sumisa aceptación de un patrimonio que lo ignoraba. En un acto de rebeldía celebrado en *Mundo Peronista*, los «excluidos» cuestionaban el valor y la legitimidad del pasado seleccionado «pintando en el rostro marmóreo [de un monumento], unos mostachos grotescos» y usando su sombra como sitio para el picnic.

- Clementi, Hebe (1992). Las buenas bibliotecas. *Todo es historia*, 14(299), 72-79.
- CONABIP (1948a). Vida de la Comisión Estadística Bibliotecaria. *Revista de la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares*, 6, mayo-junio, 90-91.
- CONABIP (1948b). Primer Congreso Nacional de Bibliotecas Populares Argentinas. *Revista de la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares*, 3, octubre-diciembre, 33-40.
- CONABIP (1949). Memoria de 1948. *Revista de la Comisión de Protectora de Bibliotecas Populares*, 5, marzo-abril.
- CONABIP (1954-1955). *Guía de Bibliotecas Populares*. Buenos Aires: CONABIP.
- De Diego, José Luis (ed.) (2006). *Editores y políticas editoriales en Argentina, 1880-2000*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- Elena, Eduardo (2005). What the People Want: State Planning and Political Participation in Peronist Argentina, 1946-1955. *Journal of Latin American Studies*, 37(1), 81-108.
- Elena, Eduardo (2010). Peronism in «Good Taste». Culture and Consumption in the Magazine *Argentina*. En Matthew B. Karush & Oscar Chamosa (eds.), *The New Cultural History of Peronism* (pp. 209-237). Durham: Duke University Press.
- Fiorucci, Flavia (2011). *Los intelectuales y el peronismo*. Buenos Aires: Biblos.
- Gálvez, Manuel (1965). *Recuerdos de la vida literaria: en el mundo de los seres reales*. Buenos Aires: Hachette.
- Goedeken, Edward A. (2004). The Literature of American Library History 2001-2002. *Libraries & Culture*, 39(2), 175-211.
- González, Ricardo (1990). Lo propio y lo ajeno. Actividades culturales y fomentismo en una asociación vecinal. Barrio Nazca (1925-1930). En Diego Armus (comp.), *Mundo urbano y cultura popular* (pp. 93-128). Buenos Aires: Sudamericana.
- Gutiérrez, Leandro H. & Luis Alberto Romero (1989). Sociedades barriales, bibliotecas populares y cultura de los sectores populares: Buenos Aires, 1920-1945. *Desarrollo Económico*, 29(113), abril-junio.
- Hill, Leonidas E. (2001). The Nazi Attack on «Un-German» Literature. En Jonathan Rose (ed.), *The Holocaust and the Book. Destruction and Preservation* (pp. 9-46). Amherst: University of Massachusetts Press.
- Hourcade, Luis A. (1952). Evolución de la bibliotecología en la Argentina, 1757-1952. Separata de *Universidad*, *Revista de la Universidad Nacional del Litoral*, 25.
- Johanningsmeir, Charles (2004). Welcome Guests or Representatives of the «Mal-Odorously Class»? Periodicals and Their Readers in American Public Libraries, 1876-1914. *Libraries & Culture*, 39(3), 260-292.

- Kasinec, Edward (2001). A Soviet Research Library Remembered. *Libraries & Cultura*, 36(1), 16-26.
- Magaldi, Juan Bautista (1994). *Argentina*. Una revista que hizo historia. *Placet*, 63, enero, 28-30.
- Martínez Zuviría, Gustavo (1933). Un público heterogéneo. En *La Biblioteca Nacional en 1932. Memoria elevada al Excmo Señor Ministro de Justicia e Instrucción Pública Dr. D. Manuel M. de Iriondo*. Buenos Aires: Imprenta de la Biblioteca Nacional.
- Martínez Zuviría, Gustavo (1947). Considerandos sobre la reglamentación de la profesión de bibliotecario. En *La Biblioteca Nacional en 1945-1946*. Buenos Aires: Imprenta de la Biblioteca Nacional.
- Moreno, Juan Carlos (1962). *Gustavo Martínez Zuviría*. Buenos Aires: Ediciones Culturales Argentinas.
- Mundo Peronista* (1951). Hasta en el pueblo más lejano. *Mundo Peronista*, 9, 15 de noviembre, p. 20.
- Mundo Peronista* (1952). El pueblo y sus monumentos. *Mundo Peronista*, 1(18), 1 de abril.
- Obligado, Carlos (1948). Advertencia. *Revista de la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares*, 1, abril- junio, 1.
- Okada, Emily (2005). Review: Thomas Augst and Wayne Wiegand, *Libraries as Agencies of Culture*. *The Library Quarterly*, 75(1), enero, 91-93.
- Pastoriza, Elisa & Juan Carlos Torre (1999). Mar del Plata, un sueño de los argentinos. En Fernando Devoto & Marta Madero (eds.), *Historia de la vida privada en la Argentina*, tomo 3 (pp. 49-77). Buenos Aires: Taurus.
- Plotkin, Mariano (1994). *Mañana es San Perón*. Buenos Aires: Ariel.
- Quiroga, Nicolás (2008). Las Unidades Básicas durante el primer peronismo. Cuatro notas sobre el Partido Peronista a nivel local. *Nuevo Mundo. Mundos Nuevos* [en línea], <http://journals.openedition.org/nuevomundo/30565>
- Rodríguez Pereyra, Ricardo (1994). «La Biblioteca Nacional Argentina, 1901-1993». Tesis de posgrado. Instituto Torcuato Di Tella.
- Romero, Luis Alberto (1990). Buenos Aires en la entreguerra: libros baratos y cultura de los sectores populares. En Diego Armus (comp.), *Mundo urbano y cultura popular. Estudios de historia social argentina* (pp. 40-67). Buenos Aires: Sudamericana.
- Romero, Luis Alberto (1995). Nueva Pompeya, libros y catecismo. En Leandro Gutiérrez & Luis Alberto Romero, *Sectores populares, cultura y política. Buenos Aires en la entreguerra* (pp. 173-193). Buenos Aires: Sudamericana.

- Romero, Luis Alberto (2006). La política en los barrios y en el centro: parroquias, bibliotecas populares y politización antes del peronismo. En Francis Korn & Luis Alberto Romero (comps.), *Buenos Aires/Entreguerras: La callada transformación, 1914-1945* (pp. 33-58). Buenos Aires: Alianza.
- Sirvén, Pablo (2011). *Perón y los medios de comunicación. La conflictiva relación de los gobiernos justicialistas con la prensa, 1943-2011*. Buenos Aires: Sudamericana.
- Stieg, Margaret F. (1992). *Public Libraries in Nazi Germany*. Tuscaloosa: The University of Alabama Press.
- Tesler, Mario (2004). *Revistas de la Biblioteca Nacional Argentina, 1879-2001*. Buenos Aires: Academia Nacional de Periodismo.
- Velázquez, Luis Horacio (1952). *Pobres habrá siempre*. Buenos Aires: Kraft.
- Velázquez, Luis Horacio (1955) Próceres, escritores y libros. En Domingo Buonocore (ed.), *El mundo de los libros. Páginas sobre el libro, el escritor, la imprenta, la lectura, la biblioteca, el bibliotecario, el bibliófilo y el librero*. Santa Fe: Librería y Editorial Castellví.
- Veneroni, Rita (1995). *Bibliotecas populares argentinas*. Buenos Aires: Manrique Zago.
- Wiegand, Wayne (1989). «An Active Instrument for Propaganda»: *The American Public Library during World War I*. Westport: Greenwood.